



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DENOMINADO ATENCIÓN A MADRES Y EMBARAZADAS CON ALTERACIONES DE CONDUCTA Y/O INESTABILIDAD EMOCIONAL EN RESIDENCIA NORTE, CENTRO MATERNAL ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD)**

Ley 3/2011, de 22 de marzo, de la Comunidad de Madrid, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada, en consonancia con las competencias autonómicas y el principio rector consagrado en el artículo 39 de la Constitución Española para la protección social, económica y jurídica de la familia, y asegurar la protección integral de las madres, cualquiera que sea su estado civil, tiene por objetivo básico la protección integral de la mujer embarazada que se encuentre en especial riesgo social o en situación de desamparo, singularmente cuando concurren circunstancias de falta de integración en una relación familiar estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos contemplando, entre otras actuaciones, la creación de centros de apoyo a la mujer embarazada y especial atención a la mujer embarazada menor de edad, mediante actuaciones de educación para la maternidad, adecuada a su edad y circunstancias, así como apoyo psicológico antes y después del parto. Asimismo, el artículo 10.3 de la Ley 3/2011 establece que la Comunidad de Madrid podrá, igualmente, establecer convenios con los centros de iniciativa social que se presten a ofrecer asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, a través de la Subdirección General de Familia y Fomento de la Natalidad, gestiona el funcionamiento de un centro maternal de gestión directa, Residencia Norte en el que se ha detectado un creciente número de embarazadas y madres jóvenes (muchas de ellas, menores de edad, procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid) que a su ingreso en el centro presentan dificultades para tolerar límites, inestabilidad emocional y en ocasiones alteraciones de conducta. A la crisis propia de la adolescencia, el escaso nivel educativo, socioeconómico y nulo apoyo familiar se une la incertidumbre derivada de tener que responsabilizarse de un bebé, en una etapa evolutiva en la que todavía no se encuentran preparadas para asumir esta responsabilidad.

Por lo anterior, y para la adecuada atención de este colectivo se hace necesario apoyar, por un lado, a los profesionales que prestan sus servicios en este centro maternal, para que puedan abordar con éxito su intervención, habida cuenta de la nueva problemática añadida que presentan las actuales usuarias. Y por otro lado, respecto de estas últimas y sus hijos, facilitarles orientación y apoyo psicológico, así como terapia ocupacional, de modo que puedan superar las dificultades derivadas de su trastorno de conducta, a la par que crear un apego y vínculo seguro con su hijo, y prevenir y detectar así precozmente el trastorno o enfermedad mental en sus hijos.

Las actividades propias del presente contrato se consideran de carácter especializado, no ordinario de la Administración, que deben ser prestadas por personal cualificado y equipado para tal fin. El equipo necesario para la prestación de los servicios estará integrado por un licenciado en Psicología, especialidad clínica, con al



menos dos años de experiencia en intervención con familias y/o menores y un terapeuta ocupacional con formación universitaria o formación profesional de grado superior. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no dispone de este tipo de personal, por lo que se considera necesario proceder a su contratación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4 letra f) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

A los efectos probatorios del párrafo anterior, basta reseñar que para el desempeño que las funciones que le son propias a la Subdirección General de Familia Infancia y Fomento de la Natalidad, unidad responsable del contrato, cuenta únicamente como personal técnico especializado con tres técnicos especialistas escala de asistentes sociales y un titulado superior psicólogo, que atienden otras funciones propias de la Subdirección General con 5 CAEF para coordinar, siendo los requerimientos del contrato diferentes a los medios personales disponibles.

Asimismo debemos incidir en la importancia de una adecuada racionalización de los medios personales con que cuenta la Administración, que, como medio preferente a la externalización de los servicios, oriente a que, mediante políticas de gestión del personal adecuada, se destinen los medios personales que puedan estimarse excesivos en dependencias sobredimensionadas a aquellas otras funciones que por su naturaleza, relevancia o carácter crítico requieran de una mayor asignación de medios humanos; dicho esto, en la actualidad, no existe medios personales excesivos en la plantilla de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad con los que pueda cubrirse el servicio del que es objeto el presente contrato necesitando por ello la externalización de dicho servicio.

En el presente expediente, se ha optado por la tramitación de un contrato administrativo como forma jurídica más adecuada para articular la relación entre esta Administración y el adjudicatario, en lugar de utilizar otras figuras como el convenio o el concierto, por las siguientes razones:

**Naturaleza contractual de la relación** La actuación objeto del expediente implica la prestación de un servicio a cambio de una contraprestación económica, con obligaciones recíprocas claramente definidas entre las partes. Esta relación bilateral, basada en el intercambio de prestaciones, encaja plenamente en el ámbito de los contratos administrativos regulados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La finalidad del presente expediente es satisfacer una necesidad pública específica mediante la ejecución de una prestación determinada, lo que exige garantizar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, tal como establece la normativa contractual vigente.

No se utiliza otras formas tales como el convenio o contrato debido a que el primero, regulado por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, está concebido para formalizar colaboraciones entre administraciones públicas o entre estas y entidades sin ánimo de lucro, sin que exista una relación de intercambio económico directo ni una obligación de resultado. En este caso, no se trata de una colaboración institucional, sino de una contratación de servicios con contraprestación económica, lo que excluye el uso del convenio.

El concierto es una modalidad específica prevista para determinados servicios sociales, sanitarios o educativos, en los que el prestador debe estar previamente acreditado y el servicio debe estar legalmente previsto como concertable. Dado que la prestación objeto del expediente no se encuentra en ese ámbito ni cumple con los requisitos exigidos para los conciertos, esta figura no resulta aplicable.

Añadir además que el contrato administrativo permite un mayor control sobre la ejecución de la prestación, así como la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento, lo que refuerza la seguridad jurídica y la eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - \*\*\*6248\*\*  
Fecha: 2025.07.18 14:56

Fdo.- Silvia Valmaña Ochaíta